



SALA SEGUNDA DE DECISIÓN CIVIL

Medellín, veinticuatro de enero de dos mil veintitrés

Se procede a decidir el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante frente a la sentencia proferida el 23 de junio de 2022 por el Juzgado Dieciocho Civil del Circuito de Oralidad de Medellín, en el proceso ejecutivo adelantado por EIT SAS contra RUSBEL KELLY FAJARDO CRISTANCHO.

1. ANTECEDENTES

- 1.1** El demandado firmó con espacios en blanco el 1 de enero de 2018 un pagaré con instrucciones en favor de la demandante, como respaldo de las obligaciones que se generarían al finalizar la relación comercial entre EIT SAS y HEALTH TEAM SAS por suministro de material para Osteosíntesis.
- 1.2** Finalizada la relación contractual, HEALTH TEAM SAS debe a la demandante, varios pagos relacionados en facturas no canceladas por \$177.000.000, con plazo vencido el 23 de marzo de 2019.
- 1.3** Pretende se libre mandamiento de pago en su favor y en contra del demandado por \$177.000.000 más intereses corrientes e intereses moratorios.

2. MANDAMIENTO DE PAGO

Por auto del 16 de junio de 2021 el Juzgado libró mandamiento de pago por el capital más los intereses moratorios a partir del 23 de marzo de 2019.

3. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA

El demandado contestó en forma extemporánea la demanda.

4. PRUEBAS DE OFICIO

El Juzgado de primera instancia a través de providencia del 26 de mayo de 2022 con fundamento en los artículos 372 y 373 del CGP y a pesar de la contestación extemporánea de la demanda, decretó pruebas de oficio “...*de cara a establecer la verdad de los hechos*”; correspondientes a interrogatorio a las partes; oficio a HEALTH TEAM SAS para que aporte los documentos y soportes contables que acredite el pago a la demandante con ocasión del convenio del 1 de enero de 2018; oficio a la demandante para acreditar con documentos y soportes contables la facturación por \$177.000.000.

5. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

El Juez como Director del Proceso cesó la ejecución con fundamento en las pruebas decretadas de oficio que permitieron el esclarecimiento de los hechos; para el efecto hizo énfasis en el marco teórico del título ejecutivo consagrado en el artículo 422 del CGP y del título valor - pagaré - con base en los artículos 621 y otros del C de Co, que establecen la literalidad de las obligaciones, el obligado y la titularidad para su cobro, es decir, el título valor es claro, expreso, actualmente exigible, es auténtico y proviene del demandado.

Explica que siendo extemporánea la contestación de la demanda, fue necesario esclarecer los hechos objeto del juzgamiento a través del decreto de pruebas de oficio y a cargo de ambas partes; hechos que probados permiten resolver el proceso, con base en las pruebas regular y oportunamente allegadas, con la carga de la prueba que corresponde a cada parte y con fundamento en la valoración probatoria de acuerdo con reglas de la sana crítica; por lo que conforme con las pruebas decretadas de oficio se requirió a la parte demandante para que allegara los documentos que sirvieron de soporte para llenar el título valor y a la demandada para demostrar el pago.

Así, el título valor fue otorgado en blanco con una firma puesta en el papel, teniendo el tenedor el derecho de llenarlo y exigirlo conforme con las instrucciones otorgadas – art. 622; instrucciones que indican los parámetros para diligenciarlo, de ahí que el monto será igual a las sumas exigibles al momento de diligenciarlo, cuyo vencimiento quedó a potestad de la demandante y cuando se terminara el contrato de suministro, entre otros aspectos.

De tal manera que el título valor guarda relación con el contrato de suministro de material de osteosíntesis; la demandante remitía y entregaba en inventario mercancía quedando en consignación; una vez utilizada la reportaba para su facturación; remitida la factura debía ser aceptada y corría el término para su pago.

Para el mes de enero de 2019 se presentó inconveniente de la demandante para continuar suministrando mercancía, dando por terminado el contrato; pero HEALTH TEAM SAS HELTING realizó los pagos de las facturas que permitieron el diligenciamiento del pagaré; ahora la no imputación adecuada de los pagos por la pérdida de los descuentos, corresponde a un escenario declarativo, porque el acreedor al guardar silencio genera confianza legítima del pago en el deudor, el actuar de la demandante afecta el principio de la

buena fe; en lo referente con la devolución de la mercancía a la proveedora, la afectación de la trazabilidad es un asunto vinculado a un incumplimiento contractual al no tratarse de mercancía consumida que no podía facturarse, tema que se debe tratar en un trámite declarativo.

Los asuntos de los descuentos y devolución de mercancía carecen de certeza y generan incertidumbre para la integración del título valor, a lo cual debe incluirse lo relacionado con los honorarios del Abogado; para concluir que el pagaré fue integrado desbordando las facultades brindadas a la acreedora, esperado que actuara de buena fe con base en los compromisos adquiridos, no siendo posible seguir adelante con la ejecución.

6. APELACIÓN

La parte demandante arguye el Juzgado desconoció las normas sustanciales sobre títulos valores, se presentó indebida valoración probatoria y desequilibró las cargas procesales de las partes.

Expresa que el soporte de un proceso ejecutivo en el título ejecutivo, documento claro, expreso, actualmente exigible que proviene del deudor y constituye plena prueba contra él, como lo consagra el artículo 422 del CGP; título valor que contiene unos requisitos formales que sólo pueden ser atacados a través del recurso de reposición contra el mandamiento de pago y unos sustanciales, sobre los cuales no existió contradicción por parte del demandado; sin embargo, el Juzgado decretó pruebas de oficio.

El pagaré base de la ejecución es válido desde su creación y no existen elementos de prueba, normativos, doctrinales o jurisprudenciales que exterioricen la ruptura del título valor; sin embargo, el Juzgado cesó la ejecución por falta de claridad porque las facturas no explican la suma

pretendida en el título y fueron pagadas, en vez de continuar adelante con la ejecución del pagaré como garantía del contrato de suministro.

Título valor con espacios en blanco que fue llenado conforme con las instrucciones, por lo que no procedía la inversión de la carga de la prueba para que la demandante acreditara cómo y por qué lo llenó, ello le correspondía al demandado; máxime que el monto sería igual a la suma de todas las obligaciones exigibles constaran o no en facturas.

Así los pagos acreditados a la luz del contrato de suministro por el demandado resultaron ser parciales, porque el no pago oportuno dentro de los 90 días, implica el no hacerse acreedor a los descuentos; además que el pagaré refleja lo debido por el demandado que no necesariamente queda consignado en las facturas.

También, cuando el ejecutado no formuló excepciones ni recurso de reposición contra el mandamiento de pago, manda el artículo 440 seguir adelante con la ejecución, por ser extemporánea la contestación; pero el Juzgado en contradicción con la norma, fijó fecha para audiencia y practica de pruebas de acuerdo con los artículos 372 y 373 del CGP

7. PROBLEMA JURÍDICO A RESOLVER

¿Se probaron hechos constitutivos de la excepción derivada del negocio causal?

7. CONSIDERACIONES

7.1 Precisión liminar

El trámite del proceso ejecutivo a diferencia del declarativo parte de la certeza del derecho y de la correlativa obligación que se pretende cobrar; el derecho está en cabeza del ejecutante y la obligación en la del ejecutado; el derecho debe ser claro, expreso, actualmente exigible, provenir del deudor y constituir plena prueba contra él como lo consagra el artículo 422 del CGP, al exigir que se allegue un documento que alcance la categoría de título ejecutivo; por lo que el Juez, cuando el documento, el escrito de demanda y los anexos cumplen con los parámetros legales, libra mandamiento de pago conminando el obligado al pago como lo estatuye el artículo 430 del CGP.

Precisamente cuando los títulos valores son claros, expresos, actualmente exigibles, cumplen con las menciones de ley, con los requisitos de ley e incorporan una declaración unilateral de voluntad de obligarse y está firmado por obligado cambiario (excepto en la aceptación tácita de la factura de venta), prestan mérito ejecutivo, al verificarse que confluyen los parámetros de los artículos 422 del CGP en armonía con los artículos 619, 620, 621, 625, 793, los específicos para cada título valor en particular, entre otros, del Código de Comercio; aclarando que con fundamento en el artículo 620, cuando el título valor no llene los requisitos y menciones de ley, es ineficaz de pleno derecho como lo estatuye el artículo 897 del C de Co, excepto cuando se trata de la fecha de creación, del lugar de creación y del de cumplimiento que los suple la ley (artículo 62 del C de Co) y el vencimiento de la factura de venta cuando no se incorpora literalmente la cual deberá ser pagadera dentro de los 30 días calendario siguientes a su emisión (numeral 1 del artículo 774 del C de Co).

De tal manera que los requisitos y menciones de ley de los títulos valores, excepto los que la ley suple expresamente, para su eficacia como instrumentos cambiarios, para que produzcan los efectos los jurídicos y económicos que se les atribuye, trascienden del rango formal a lo sustancial.

En este orden, no está en duda que el pagaré presentado con fundamento de la presente acción cambiaria de cobro a través del proceso ejecutivo cumple con la claridad, con la expresividad, con la exigibilidad, con los requisitos generales y específicos de ley, que le permiten alcanzar la categoría de título valor que presta mérito ejecutivo.

Situación que daría inicialmente lugar a dos situaciones procesales y sustanciales, en el entendido que una vez notificado el demandado – ejecutado dentro de la oportunidad legal para el ejercicio de su derecho de contradicción y de defensa, formule las excepciones cambiarias consagradas en el artículo 784 del C de C con el acervo probatorio que las sustente, para lo cual de Juez debe dar traslado a la parte ejecutante para que se pronuncie, allegue pruebas y luego adelante las audiencias respectivas que concluyen con sentencia (artículos 443 y 444 del CGP).

La otra posibilidad es que no se presenten excepciones cambiarias, ante lo cual el Juez ordenará mediante auto seguir adelante con la ejecución (párrafo 2 del artículo 440 del CGP); que sería el trámite a seguir en el caso concreto por lo extemporáneo de la contestación de la demanda; sin embargo y en el asunto a examen, no se puede pasar por alto el deber oficioso del Juez para el decreto y practica de pruebas, al consagrar el artículo 170 del CGP:

“El juez deberá decretar pruebas de oficio...cuando sean necesarias para esclarecer los hechos objeto de la controversia...”

(Subraya extratexto).

Fue así como el Juez de primera instancia ante lo relatado por la misma ejecutante con respecto al título valor creado con espacios en blanco (artículo 622 del C de Co), que fue completado de acuerdo con las instrucciones que surgieron de un negocio causal de suministro que el demandante garantizó con

la firma del pagaré, en procura de hacer prevalecer el derecho sustancial sobre el procesal a través de providencia del 26 de mayo de 2022 con fundamento en los artículos 372 y 373 del CGP, decretó pruebas de oficio “**...de cara a establecer la verdad de los hechos**”; correspondientes a interrogatorio a las partes; oficio a HEALTH TEAM SAS para que aporte los documentos y soportes contables que acredite el pago a la demandante con ocasión del convenio del 1 de enero de 2018; oficio a la demandante para acreditar con documentos y soportes contables la facturación por \$177.000.000.

Decreto oficioso de pruebas por parte del Juzgado de instancia, que tiene sustento constitucional, estatutario y legal, en la búsqueda de la prevalencia del derecho sustancial sobre el procesal, como lo consagran, entre otros, el preámbulo, los artículos 1, 2, 4, 29, 228 y 229 de la CP, los artículos 1 y 2 de la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia, los artículos 1, 2, 4, 7, 11, 13, 14 y 42 del CGP.

En este sentido, el artículo 282 del CGP estatuye:

“En cualquier tipo de proceso, cuando el juez halle probados los hechos que constituyen una excepción deberá reconocerla oficiosamente en la sentencia...”

De tal manera, que el decreto oficioso de pruebas en primera instancia no es arbitrario ni caprichoso ni antojadizo, encontrando sustento constitucional, estatutario, legal y en los supuestos fácticos que sirvieron de fundamento a la demanda ejecutiva, para examinar la incidencia del negocio causal en el diligenciamiento del tenor literal del pagaré base del recaudo.

Temática que se abordará en el escenario de la hipotética configuración de una excepción cambiaria relacionada con el negocio causal que permitió el origen a la vida jurídica y económica del título valor contemplada en el numeral 12

del artículo 784 del C. de Co., trascendiendo los temas de los requisitos y menciones de ley, de la falta de claridad, de expresividad y de exigibilidad propios del pagaré (artículos 620 del C de Co y 422 del CGG), puesto que se derivan del tenor literal del título valor (artículo 627 del C de Co).

Del texto del título valor se desprenden en forma cristalina los aspectos relacionados con su creación, obligados, beneficiario, fecha de vencimiento y monto de la obligación, entre otros, sin que sea menester acudir a elementos adicionales de interpretación o se advierta confusión en su redacción o se tenga que acudir a intrincados raciocinios para comprender su contenido; pero como el pagaré no ha circulado cambiariamente, el negocio causal puede incidir en su ejecución.

7.2 ¿Excepción derivada del negocio causal?

Desde lo sustantivo y de acuerdo con el haz probatorio es factible estudiar la incidencia del negocio que permitió el origen del título valor – pagaré - que es objeto de esta acción ejecutiva, para derivar de ello posibles consecuencias en favor o en contra del ejecutado o de la ejecutante.

A pesar de la abstracción, es decir, de la separación entre el negocio originario (contrato de suministro) y el pagaré (obligación personal que se materializa cambiariamente) al surgir con vida propia jurídica y económica como lo establece el principio de incorporación estatuido en el artículo 619 del C. de Co., el artículo 784 del C de Co y tratándose de las excepciones cambiarias propias de las acciones cambiarias que se ejercen con base en títulos valores, estatuye en su numeral 12 que cuando el título valor no ha circulado y en la acción están presentes los promitentes y beneficiario original, se puede plantear como excepción de fondo, ***“Las derivadas del negocio jurídico que dio origen a la creación o transferencia de título, contra el demandante que haya sido parte en el respectivo negocio...”***

Por ende, el principio de incorporación permite que la obligación y el correlativo derecho cambiario se independicen del negocio subyacente, se materialicen como una obligación cambiaria distinta, sin que la circulación cambiaria del título valor abstracto, traiga aparejada al mismo tiempo el del negocio original; porque el derecho y la correlativa obligación cambiaria se plasman en el soporte material con el lleno de los requisitos, menciones de ley y el uso adecuado del idioma para establecer su claridad, expresividad y exigibilidad; que a pesar de la abstracción, cuando el título no ha sido transferido a través de su ley de circulación cambiaria, puede ser afectado por el negocio que le dio origen..

De tal manera que cuando nos encuadramos dentro de los supuestos fácticos consagrados en el numeral 12 del artículo 784 del C de Co (porque no ha circulado cambiariamente), así el pagaré se haya abstraído de su causa, cualquier situación anómala que se presente con respecto al negocio subyacente, puede afectar la acción cambiaria; máxime cuando en el proceso ejecutivo con la acción cambiaria en examen, surgieron serias y fundadas dudas con respecto al diligenciamiento de los espacios en blanco del pagaré, concretamente en lo tocante con el monto de capital y su vencimiento; por cuanto no hay claridad en cuanto a las facturas o valores debidos por parte del demandado que sirvieran de fundamento a los \$177.000.000 que figuran en el tenor literal título valor y desde cuándo era exigible dicho dinero.

En este orden y en el caso que analiza esta Sala de Decisión Civil, las características de claridad, expresividad y exigibilidad propias del proceso ejecutivo que marcan la diferencia con el declarativo, una vez examinado el haz probatorio causal o subyacente allegado a este trámite (contrato de suministro – instrucciones – interrogatorios de parte – relación de facturas – relación de pagos – descuentos – devolución de mercancía – correos

electrónicos, entre otros), permite llegar a la conclusión que el derecho incorporado literalmente en el pagaré no tiene respaldo causal.

No hay duda de la relación comercial del contrato de suministro; pero en este escenario del proceso ejecutivo, con fundamento en las pruebas allegadas con la demanda, los hechos expuestos en el escrito de demandada y con las de oficio decretadas por el Juez de primera instancia, no se demostraron obligaciones causales que respaldara el contenido del título valor, así el pagaré cumpla con su materialidad original, con la incorporación, con la literalidad, con la autonomía, con la necesidad, con la legitimación, con los requisitos y menciones de ley, dando aplicación a lo postulado por el numeral 12 del artículo 784 del C de Co.

7.2.1 En lo tocante con la facturación que aportó la parte demandante para verificar las sumas de dinero pendientes de pago y con plazo vencido al 23 de marzo de 2019 (fecha que incorporó literalmente en el pagaré como tiempo para su exigibilidad), en ninguna de ellas y para ese día cierto y determinado, habían vencido, todavía estaba pendiente que transcurriera el lapso para su pago, por lo que no podían ser el soporte causal de la obligación cambiaria que se pretende ejecutar, quedando la suma de dinero reflejada en el título valor sin soporte causal:

Factura No.	Emisión	Vencimiento
2991	18-6-2019	16-9-2019
2849	15-2-2019	16-5-2109
2850	15-2-2019	16-5-2019
2847	15-2-2019	16-5-2019
2852	16-2-2019	17-5-2019
2856	16-2-2019	17-5-2019
2854	16-2-2019	17-5-2019
2857	16-2-2019	17-5-2019

2853	16-2-2019	17-5-2019
2851	16-2-2019	17-5-2019
2859	16-2-2019	17-5-2019
2860	16-2-2019	17-5-2019
2858	16-2-2019	17-5-2019
2855	16-2-2019	17-5-2019
2861	16-2-2019	17-5-2019
2868	18-2-2019	19-5-2019
2888	2-3-2019	31-5-2019

7.2.2 Con respecto a la pérdida de los descuentos en el valor de la mercancía dada en consignación, utilizada y facturada, por su no pago dentro de los 90 días siguientes a la fecha de emisión de la factura que hipotéticamente se reflejan en el monto del pagaré; como no se sabe sobre qué facturas o cuentas pendientes causales se soportó el tenor literal del pagaré; no hay forma de establecer y calcular los descuentos que presuntamente se perdieron por pago extemporáneo, teniendo la oportunidad de hacerlo la ejecutante a través de diversos medios de prueba; además, ni siquiera el representante legal de la entidad demandante en el interrogatorio de parte, explicó y dio claridad al respecto; no se allegaron medios de prueba conducentes, pertinentes y eficaces; es decir, no es posible establecer cuáles facturas se pagaron por fuera del 23 de marzo de 2019 que tuvieran relación directa con el monto incorporado y expresado en el pagaré; no se determinó a cuánto ascendía el valor de las facturas pagadas por fuera de término que incidieran directamente en el pagaré; si durante la relación comercial se toleró o no el pago por fuera de tiempo sin castigar con el descuento, entre otros aspectos; generando incertidumbre en cuanto al respaldo causal de la suma incorporada en el tenor literal del pagaré valor por concepto de pérdida de descuentos en la facturación.

7.2.3 La tasación y pago anticipado de los honorarios de Abogado por el proceso ejecutivo, no fueron autorizados en las instrucciones emitidas por el ejecutado para ser incorporados literalmente en el pagaré; situación confusa que ni siquiera el representante legal de la demandante aclaró al responder al interrogatorio, quien generó desconcierto y duda en su valor, monto o fórmula para su cálculo; al parecer el precio se calculó sobre un 25% de lo debido por el ejecutado; pero como se ha considerado en esta providencia, no hay certeza causal de los valores causales pendientes de pago que soportan la suma incorporada en el pagaré; máxime que las instrucciones giraron alrededor de los dineros que se causaran y quedaran pendientes de pago como consecuencia directa de las obligaciones que surgieran del contrato de suministro de material para Osteosíntesis.

7.2.4 También en incertidumbre probatoria causal para ser respaldada en el pagaré, queda el valor de la trazabilidad de la mercancía dada en consignación, no utilizada y devuelta; no está dilucidado ni esclarecido este tema; la “denuncia” por alteración del registro sanitario o cambio de material de osteosíntesis ante la Superintendencia Nacional de Salud y otras entidades y las constancia de remisiones de mercancía, entre otros medios probatorios, no tienen el poder de convicción para considerar que la mercancía fue alterada o se cambió el material de osteosíntesis, porque no pasa de ser una noticia de una posible infracción o un cambio de material o de falta de trazabilidad que no se demostró al interior de este proceso ejecutivo para respaldar cifra de dinero incorporada literalmente en el pagaré objeto del cobro ejecutivo.

En consecuencia y por las razones expuestas en cuanto a la falta de respaldo causal de la suma incorporada literalmente en el pagaré, se CONFIRMARÁ la sentencia de primera instancia.

7. COSTAS

Como la sentencia de primera instancia se CONFIRMARÁ, de acuerdo con los numerales primero y tercero del artículo 365 del CGP, se impondrá condena en costas en esta instancia a cargo de la parte demandante y en favor de la parte demandada.

10.AGENCIAS EN DERECHO

De conformidad con lo establecido por el artículo 365 del CGP en concordancia con el artículo 5 numeral 1 del Acuerdo PSAA16-10554 del 5 de agosto de 2016 del Consejo Superior de la Judicatura, en esta instancia, se fijan como agencias en derecho el equivalente a UN (1) SALARIO MÍNIMO LEGAL MENSUAL VIGENTE, a cargo de la parte demandante y en favor de los demandados.

DECISIÓN

La **SALA SEGUNDA CIVIL DE DECISIÓN DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN**, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la Ley,

FALLA

PRIMERO: Por las razones expuestas, **SE CONFIRMA** la sentencia de la referencia por encontrar probada la excepción derivada del negocio causal.

SEGUNDO: COSTAS, en esta instancia a cargo de la parte demandante y en favor de la demandada.

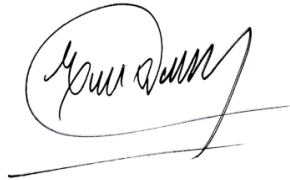
TERCERO: Se fijan como **AGENCIAS EN DERECHO**, el equivalente a UN (1) SALARIO MÍNIMO LEGAL MENSUAL VIGENTE a cargo de parte demandante y en favor de la demandada.

NOTIFÍQUESE POR ESTADOS Y ELECTRÓNICAMENTE.

LOS MAGISTRADOS



RICARDO LEÓN CARVAJAL MARTÍNEZ



LUIS ENRIQUE GIL MARÍN



MARTHA CECILIA LEMA VILLADA

Con salvamento de voto